


Alegatos de Conclusión HERNÁN MARTÍNEZ MELENDEZ 2019-00013 REPARACIÓN DIRECTA

Daniel Enriquez Mora <danielenriquezmora@gmail.com>

Mar 11/04/2023 12:14

Para: Andrea Melissa Andrade Ruiz <aandradr@cendoj.ramajudicial.gov.co>; mgrodriguez@procuraduria.gov.co <mgrodriguez@procuraduria.gov.co>; Procesos Territoriales <PROCESOSTERRITORIALES@DEFENSAJURIDICA.GOV.CO>; sanchezabogadospasto@gmail.com <sanchezabogadospasto@gmail.com>; Bibian Sanchez Rodriguez <bsanchez@firmasanchez.com>; contactenos@taminango-narino.gov.co <contactenos@taminango-narino.gov.co>; ROLANDO MUÑOZ <juridicotaminango@gmail.com>; agmuriel@yahoo.es <agmuriel@yahoo.es>; notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>; dgaviria@gha.com.co <dgaviria@gha.com.co>; Juzgado 09 Administrativo - Nariño - Pasto <adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (342 KB)

Alegatos de conclusión proceso 2019-00013-00.pdf;

Pasto, 11 de abril de 2023

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO

adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Medio De Control:	REPARACIÓN DIRECTA
Radicado:	520013333009 20190001300
Demandante:	LAURENTINO MARTOS NARVÁEZ Y OTROS
Demandado:	MUNICIPIO DE TAMINANGO, AMERICANA DE CONSTRUCCIONES y HERNÁN MARTÍNEZ MELENDEZ
Referencia:	Alegatos de Conclusión

Cordial Saludo,

DANIEL ENRIQUEZ MORA en mi calidad de apoderado del demandado **HERNÁN MARTÍNEZ MELENDEZ**, en forma atenta y respetuosa, me permito adjuntar Alegatos de Conclusión, para que se le imprima el trámite pertinente.

Sin otro particular,

DANIEL ENRIQUEZ MORA

C.C. 1.085.299.363 de Pasto

T.P. 273.220 del C.S. de la J.

danielenriquezmora@gmail.com

Apoderado Demandado

Pasto, 11 de abril de 2023

Señores
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO
adm09pas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Radicado : **2019-00013-00**
Medio de Control : **Reparación Directa**
Demandante : **Laurentino Martos Narváez** y otros
Demandados : **Mpio Taminango, Hernán Martínez Meléndez** y otro
Asunto : **Alegatos de Conclusión**

DANIEL ENRIQUEZ MORA, abogado en ejercicio, de notas civiles y profesionales ya conocidas por su despacho, actuando como apoderado del señor **HERNÁN MARTÍNEZ MELÉNDEZ**, por medio del presente me permito presentar alegatos de conclusión en el proceso de referencia.

Teniendo en cuenta que la audiencia inicial celebrada el día 21 de marzo de 2023, se adelantó hasta la etapa de Decisión de excepciones previas, en la cual se advirtió la configuración de la caducidad de la acción y se corrió traslado para alegatos a las partes, previo a proferir sentencia anticipada.

El problema jurídico sobre el cual gira el proceso en este momento es:
¿Ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad en el presente proceso de reparación directa?

Para dilucidar la respuesta a aquella problemática, se abordará el siguiente orden argumentativo: En un primer momento, se recordará que hechos se encuentran acreditados y son relevantes de cara a la constatación de la figura de la caducidad, para luego, recordar cuales son los criterios que ha instituido la jurisprudencia sobre el conteo del término de ese fenómeno en casos como el que hoy ocupa la atención de su despacho, por último, se concluirá con la respuesta a la pregunta anunciada renglón arriba.

1. Lo probado en el proceso

De los medios suasorios allegados al plenario y en relación a la figura jurídica de la caducidad se tiene acreditado,

- Que el señor **LAURENTINO MARTOS** y la señora **SANDRA MARTHOS**, ostentan derechos reales sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 248-11152 y numero predial 04-00-0031-0007-000.¹
- Que el 03 de febrero de 2015, el municipio de Taminango suscribió el contrato de obra pública No. 005 – L.P.2014 con Americana de Construcciones E.U., que tenía como objeto la “*Ampliación optimización del sistema de alcantarillado del remolino, Taminango,*

¹ Acreditado ello con la escritura y el certificado de libertad y tradición arrimados al proceso.

Nariño, occidente". La cláusula sexta del aquel convenio otorgaba como plazo de ejecución el término de 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la obra.²

- Que desde el **12 de octubre de 2016** el señor Laurentino Martos y la señora Sandra Marthos tenían conocimiento de supuestos daños en la estructura y fachada de su inmueble, generados por la "construcción y conexión del alcantarillado".³
- Que los demandantes radicaron ante la Procuraduría solicitud de conciliación el día **26 de octubre de 2017** y que la constancia de no acuerdo fue expedida el **22 de enero de 2018**.⁴
- Que la demanda de reparación directa que avocó el conocimiento del presente proceso a su despacho fue radicada el **24 de enero de 2019**.⁵

Resaltan las fechas, toda vez que ellas son lo más importante para la resolución del problema jurídico planteado.

Con aquella plataforma fáctica en consideración, se pasa al segundo punto de estas alegaciones finales.

2. Criterios establecidos para el conteo del término de caducidad en casos de daños ocasionados por la construcción de obra pública

El Consejo de Estado, ya de vieja data, ha establecido una línea constante y pacífica en su jurisprudencia sobre el tema mentado, se pasará a continuación a repasar los apartados normativos y jurisprudenciales que permitirán la resolución del problema planteado.

Reza el artículo 164 del CPACA en su literal i) lo siguiente,

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: (...)

- i) *Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de **dos (2) años, contados a partir del día siguiente al** de la ocurrencia de la acción u omisión causante del **daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo** si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia."*

De aquel canon legal, fácilmente puede deducirse que el conteo del término de caducidad en el medio de control de reparación directa tiene

² Consta ello en el contrato allegado.

³ Prueba de ello es el derecho de petición elevado por la apoderada Bibian Sánchez, en nombre de los demandantes, ante la Alcaldía Municipal de Taminango, de fecha **12/10/16** visible a folios 44 y 45 del archivo denominado 01.ProcesoDigitalizadoCuadernol.pdf

⁴ Ello lo corrobora la constancia proferida por la Procuraduría 96 Judicial I para asuntos administrativos.

⁵ Lo demuestra la constancia de reparto que corroborada en SAMAI.

varios supuestos, de los cuales se derivan diversos criterios y formas para efectuarlo.

No obstante, a pesar de la corta y sencilla descripción legal de dichos supuestos y criterios, la realidad es que la cotidianidad termina por rebasar en gran medida a los preceptos legales que lejos de resolver todos los problemas de la materialidad fáctica, en ocasiones, los complican. Es por ello, que el papel del juez en la interpretación y aplicación del derecho es tan importante y surge como una herramienta fundamental para la resolución justa del caso en concreto.

En ese orden de ideas, ante la problemática sobre el conteo del término de caducidad en el medio de reparación directa cuándo el daño es derivado de la construcción de una obra pública, el Consejo de Estado en varios pronunciamientos zanjó las diversas posiciones y plasmó una muy clara, y es que el término de caducidad en aquellos casos debe contarse un día después al **conocimiento del daño por parte del demandante, bien sea en supuestos de daño instantáneo o daño continuado.**

Primero habrá que dilucidar la diferencia entre daño instantáneo y continuado, ello con la finalidad de observar en qué momento se concreta el mismo en casos como el que hoy ocupa la atención de su despacho, para después observar las razones del por qué el conteo del término caducidad debe darse desde el conocimiento del daño acaecido.

Para la resolución de la problemática sobre el momento de acaecimiento del daño y su importancia en relación con el extremo temporal para el conteo del término de la caducidad, la jurisprudencia ha recalcado la importancia de diferenciar el concepto de daño y perjuicio,

“La identificación de la época en que se configura el daño, ha sido un tema problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, cuya ocurrencia se verifica en un preciso momento, y otros, que se extienden y se prolongan en el tiempo. En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera se puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los pobladores ribereños.”⁶

De ello, el alto tribunal ha desarrollado los conceptos de daño instantáneo y continuado, que por su importancia, se transcriben *in extenso*,

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 02 de agosto de 2019. Rad No. 76001-23-31-000-2003-02005-02. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

“La doctrina ha diferenciado entre (1) **daño instantáneo o inmediato**; y (2) **daño continuado o de tracto sucesivo**; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta **susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo**, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, **él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce**. A título de ejemplo puede citarse la muerte que se le causa a un ser humano, con ocasión de un comportamiento administrativo.

En este tipo de daño, vale la pena observar que, sus víctimas pueden constatar su existencia desde el momento mismo en que éste ocurre, como por ejemplo cuando estaban presentes en la muerte de su ser querido; pero también puede acontecer, que ellas se den cuenta de éste, luego de transcurrido algún tiempo, como cuando los familiares encuentran muerto a su ser querido, luego de una larga agonía en que se pensaba que éste estaba tan solo desaparecido; en esta segunda hipótesis, resultaría impropio contabilizar el término de la caducidad desde el momento en que se causó el daño (la muerte en el ejemplo traído), toda vez que las víctimas no sabían de ello, y más bien, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, debe hacerse desde el momento en que se tuvo conocimiento del mismo.”⁷

“Vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación de éste. **En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros**”.⁸

Lo anterior, hace fuerza concluir que en sí, el momento para contabilizar la caducidad del medio de control en estos casos, es cuándo acaece el daño, diferenciando si este fue continuado o instantáneo y no confundiéndolo con los perjuicios o consecuencias de aquellos, para dejarlo claro, así lo ha sintetizado el Consejo de Estado,

“Se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño, pues en este último evento **el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen (...)**.”⁹

Pero también ha reconocido la jurisprudencia que, en muchos casos, no es posible advertir la existencia del daño en el mismo momento de su producción y que si se planteara a raja tabla lo anterior, se soslayaría lo

⁷ Ibidem.

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de enero de 1994. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 20109, C.P. Hernán Andrade Rincón.

debido sustancial en pro de las ritualidades, por lo que se ha optado en que en estos supuestos la caducidad deberá contarse desde el momento del **efectivo conocimiento del acaecimiento del daño o de sus consecuencias.**

De manera reciente, en casos muy similares al que desató esta *litis*, el Consejo de Estado ha reiterado esa posición, es decir, que comprobado el conocimiento del daño por parte de los accionantes, ese es el momento en el cual debe comenzar el computo del término de caducidad,

*“De manera que la Sala advierte que la causa del daño cuya reparación se reclama, se deriva de la supuesta falla del servicio por la construcción inadecuada del dissipador en el predio El Refugio y de su falta de mantenimiento. Como en el presente asunto se discute la responsabilidad por un daño causado como consecuencia de una obra pública, la Sala considera que se debe aplicar la subregla establecida en la jurisprudencia citada, consistente en que **el término de caducidad se cuenta desde que el afectado tenga conocimiento de que la obra le está causando un perjuicio**, dado que fue posible determinar el momento a partir del cual la señora Dávila Rodríguez tenía un interés para acudir a la jurisdicción.”¹⁰*

Y del conocimiento efectivo del daño decantó esa corporación,

*“Es así que, del análisis de cada una de las peticiones radicadas por la parte actora ante los diferentes entes estatales, en las que se expuso la situación de la finca Los Cámbulos, encuentra la Sala que para los días 29 de mayo de 1997 y 7 de febrero de 2001 **los demandantes ya tenían pleno conocimiento de la materialización del daño**, pues en oficios calendados con esas fechas y que estaban dirigidos al Departamento Administrativo de Valorización Departamental de Antioquia y a Corantioquia, respectivamente, se dijo, en su orden, que: (i) la finca Los Cámbulos había sufrido severos daños entre el 8 y 9 de mayo de 1997, pues se desplomó un muro de contención que a su vez reventó completamente otro muro de otra construcción aledaña por causa de las aguas taponadas y que el deterioro de los potreros, la carretera y la hacienda se incrementaban día a día y (ii) que la casa amenazaba ruina, a pesar de haberse tomado algunas acciones por parte de los propietarios de la finca, así como también que dos quebradas que circundan los terrenos habían quedado desprotegidas y presentan grandes deslizamientos que afectaban la región.*

(...)

¹⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 04 de noviembre de 2022. Rad No. 25000-23-26-000-2012-00451-01. C.P. María Adriana Marín.

Así las cosas, a partir del día siguiente a la fecha indicada -8 de febrero de 2001- debe iniciarse el cómputo del término de la caducidad.”¹¹

Recogiendo las razones y conclusiones de los importantes pronunciamientos citados *supra*, y contrastándolos de manera paralela al caso *sub judice*, se tiene entonces los siguiente.

El hecho dañoso alegado por los demandantes se traduce en que en virtud del contrato suscrito entre Americana de Construcciones y el municipio de Taminango, se abrieron zanjas en el suelo de la calle aledaña a la vivienda de los demandantes y que aunado a ello, luego de la apertura, mi poderdante supuestamente impidió la continuación del proyecto cerrando esa calle, lo que generó, a criterio de los demandantes el “*estancamiento de aguas servidas y pluviales, causa probable de una excesiva humedad y filtraciones que llegaron a afectar estructuralmente la residencia de mis poderdantes. Cuya consecuencia ya se puede observar en el agrietamiento en paredes, pisos y cielo rasos*”.¹²

Véase como claramente los mismos accionantes diferencian entre el hecho dañoso y las consecuencias o perjuicios del mismo, **siendo solo uno el momento de configuración del daño, por lo que estamos ante un caso de daño instantáneo**, debido a que otra cosa son las consecuencias que la apertura de zanjas y el supuesto cierre de la calle causaron, además de que no se advierte otro hecho aislado y diverso, como para poder hablar de daño continuado que permita contar el término de caducidad de manera independiente.

Esa sería la fecha del conteo del término de caducidad si se aplicara de manera exegética el artículo 164 del C.P.A.C.A., la fecha del acaecimiento del hecho dañoso, que dicho sea de paso, no fue reseñado en ningún apartado del libelo de la demanda, no obstante, como se le ha puesto de presente al despacho, la jurisprudencia en aras de la garantía de lo sustancial sobre lo procesal, ha dicho que debe computarse el plazo desde la fecha del conocimiento efectivo de la configuración del daño o sus consecuencias, en este caso, del conocimiento de la apertura de la calle y de su supuesto cercamiento e impedimento del cumplimiento del objeto del contrato No. 005-L.P. 2014 o de los supuestos perjuicios que ello ha ocasionado.

Y es que ello se encuentra acreditado por los demandantes en el plenario. Como se dejó sentado en el apartado de hechos probados, puede asegurarse que los demandantes conocían efectivamente del daño y de los perjuicios que aquel estaba causando para el día **12 de octubre de 2016**, y ello se afirma debido al derecho de petición que radicaron ante la administración municipal de Taminango, donde en el numeral 6 de dicho

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 06 de julio de 2022. Rad No. 05001-23-31-000-2009-01330 01. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

¹² Hechos 6 y 7 de la demanda.

documento **advertían los perjuicios que se venían presentando con ocasión de la obra**¹³, por lo que el término de 2 años para incoar el medio de control de manera oportuna comenzó a contarse desde el **13 de octubre de 2016**, ello supone, que la oportunidad para acudir a la jurisdicción, *prima facie*, fenecía el día 13 de octubre de 2018, de conformidad con la regla impuesta por el artículo 118 del C.G.P. y la remisión normativo que a ese estatuto adjetivo hace la ley 1437/11,

“ARTÍCULO 118. CÓMPUTO DE TÉRMINOS. Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.”

Adicionalmente, es cierto que los demandantes presentaron solicitud de conciliación y con ello, interrumpieron el término de caducidad del día **26 de octubre de 2017**, al **23 de enero de 2018**, debido a que la constancia de no acuerdo se expidió el día **22 de enero de 2018**, es decir, los términos se suspendieron por un término de 2 meses + 27 días.

Con lo anterior en consideración, a que desde el **13 de octubre de 2016**, comenzó el computo del término de caducidad por las razones jurídicas esbozadas renglón arriba, y que a los 2 años contemplados en la ley debe sumársele el término que se mantuvo suspendido (2 meses + 27 días), resulta como fecha de caducidad el 9 de enero de 2019, día no hábil para la rama judicial, por lo cual la fecha de caducidad se trasladó al siguiente día hábil, que fue el 11 de enero de 2019; ultimo día en el cual se debía interponer la acción.

Y debido a que la demanda fue radicada el **23 de enero de 2019**, en efecto transcurrieron **2 años y 14 días**, por lo que los demandantes sobrepasaron por 14 días el término impuesto por el artículo 164 del C.P.A.C.A. lo que su vez supone, la configuración del fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa que hoy conoce su despacho, y en consecuencia, debe declararse, porque desde el 12 de enero de 2019 ya no podía acudirse a la justicia para ventilar esta controversia.

3. Conclusión y respuesta al problema jurídico

Como conclusión tenemos entonces, i) que el hecho que causó los supuestos perjuicios fue la apertura de zanjas que se dio con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública suscrito entre Americana de construcciones y el municipio de Taminango, y el supuesto posterior cierre de la calle contigua a la vivienda de los demandantes, y que el mismo debe catalogarse como daño instantáneo, ii), que los demandantes tuvieron

¹³ “6. Solicito que de manera inmediata se realicen las obras a las que haya lugar respecto de la terminación de la conexión del alcantarillado que se hace sobre ese sector, las cuales **han provocado graves daños en la estructura y fachada del inmueble de propiedad de la señora SANDRA VIVIANA MARTHOS.**”

conocimiento del daño y sus consecuencias el día 12 de octubre de 2016, y iii) que la demanda de reparación directa fue presentada el día 23 de enero de 2019, transcurriendo, en conjunto con la interrupción, 2 años y 14 días.

Por consiguiente, la respuesta a la pregunta de si *¿Ha operado en fenómeno jurídico de la caducidad en el presente proceso?* Deviene en afirmativa, por lo que su despacho deberá declarar su configuración y abstenerse de conocer el fondo del asunto. La caducidad se erige como una garantía de seguridad jurídica y su desconocimiento soslayaría el principio de confianza legítima y en el presente caso, de abstenerse el despacho de declararla, estando acaecida, estaría incurriendo en desconocimiento del precedente vertical instituido por el Consejo de Estado, lo que a su vez supone la vulneración del debido proceso en perjuicio de mi poderdante y las demás partes pasivas de esta *litis*.

4. Declaraciones

En virtud de todo lo esbozado, se solicita a su despacho que,

PRIMERO. DECLARE la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa en presente proceso 2019-00013-00.

Sin otro particular, se suscribe,



DANIEL ENRÍQUEZ MORA

C.C. 1.085.299.363 de Pasto

T.P. 273.220 del C. S. de la J.

danielenriquezmora@gmail.com

Apoderado Sr. Hernán Martínez Meléndez.